

Compañeras y compañeros:

No cabe duda que celebramos este CPF en un momento crucial, no solamente porque esta en marcha ya todo el trabajo preparatorio de las elecciones municipales y autonómicas, cuyos elementos fundamentales vamos a debatir y acordar en este consejo. Se trata de definir los ejes esenciales de nuestra campaña electoral y los principales contenidos de nuestros programas marco, tanto municipal como autonómico. Además, estamos en un tiempo trascendental donde la ofensiva para imponer las políticas de salida de la crisis que exige el capital financiero y los sectores dominantes en la Unión Europea, y que aplican con devoción el PSOE y el PP están en el primer plano del escenario político y social.

Reforma del sistema público de pensiones

El anteproyecto de ley de reforma del sistema público de pensiones, tal y como lo ha anunciado el gobierno, representa el ataque más brutal a las conquistas y los derechos de los trabajadores de todo el periodo democrático.

Cuando este en plena aplicación, representará un recorte de las pensiones equivalente a tres puntos del PIB de ese momento y un retroceso similar en la participación de las rentas salariales en la renta nacional.

Implicará dos años menos de pensión para cada pensionista, es decir, calculando en 20 años la vida media posterior a la jubilación, una pérdida media del 10 por ciento de las cantidades a percibir por ésta –que no debemos olvidar nunca que es salario diferido-.

Supondrá, además, un 6,15 por ciento de pérdida del valor de la pensión como consecuencia

del aumento del periodo de cómputo de 15 a 25 años, puesto que aunque el impacto de las cotizaciones esté ponderado en función del IPC, esta ponderación deja a un lado los avances en las carreras profesionales, y lo normal es empezar a trabajar con categoría y retribución muy inferior a cuando se finaliza.

Por último, si se exigen 38 años y medio o 37 para alcanzar el 100 por 100 de la base reguladora –en la actualidad 35-, los trabajadores que no lleguen a lo que denominan “carrera laboral completa” perderán porcentajes significativos de su pensión y no percibirán en el futuro la pensión completa a la que hoy tendrían derecho. Podemos calcular en torno a un 20 por ciento la pérdida medida de cada pensión cuando el sistema este plenamente en aplicación.

Además, tal como se están configurando otros aspectos de la reforma laboral, mediante los cuales se estimulará la contratación parcial y temporal, las “carreras laborales completas” serán prácticamente imposibles.

IU no comparte los fundamentos de esta Reforma:

-

El sistema público de pensiones español no está en riesgo y, en todo caso, su estructura actual permite mejoras importantes sin atacar a sus elementos esenciales. No hay que olvidar que incluso con más de cuatro millones y medio de parados el Fondo de Reserva sigue creciendo y la Seguridad Social tiene superávit por más que a su Secretario General se le pierdan en un mes más de once mil millones de euros de ingresos no financieros.

-

Tampoco compartimos que la reforma de las pensiones tenga algo que ver con la actual crisis económica. Estamos ante una falacia sin ningún tipo de fundamento serio. En primer lugar porque la reforma propuesta será aplicable plenamente en 2027 y confiamos que para entonces la crisis económica sea un mal recuerdo. Pero sobre todo porque lo que realmente se pretende es fomentar los fondos privados de pensiones dando más beneficios a la banca y aseguradoras y muy especialmente asegurar que en ese horizonte temporal el Estado tendrá los recursos suficientes para pagar a los bancos la refinanciación de su deuda. Este es el

meollo de la cuestión. A eso viene Merkel a España. Se llevará seguramente, entre otras, un certificado por el que Rodríguez Zapatero se compromete a respaldar la deuda de los bancos privados españoles con los bancos alemanes a costa de las pensiones del sistema público.

-

Abrir la Seguridad Social a los fondos complementarios de pensiones es simplemente establecer un sistema de dos velocidades. Una para los que se tengan que conformar con pensiones recortadas y precarias y otra para los que, con salarios altos, puedan pagar un plan complementario beneficiado fiscalmente con los impuestos de todos los contribuyentes.

El horizonte pues se caracterizará por dos elementos esenciales que desde luego Izquierda Unida no comparte:

1.

Un empobrecimiento general de los trabajadores actuales cuando lleguen a ser pensionistas (posiblemente más de 15 millones de personas, que en su inmensa mayoría verán recortados sus ingresos por pensión en una etapa de la vida en que los recursos suficientes son imprescindibles.

2.

Un incremento de la desigualdad social, porque aquellos que percibieron altos salarios durante su vida profesional tendrán pensiones complementarias a las que no podrán acceder otros con salario s bajos y contrataciones precarias e intermitentes.

Lo que plantea el Gobierno y la derecha, es decir PP, PSOE y los nacionalistas de derechas, son más años de trabajo, más años de cotización y menores pensiones. Mientras tanto los grandes bancos anuncian interesantes beneficio en época de crisis, 4.606 millones de euros el BBVA y 8.181 el Santander, es decir, más recortes sociales, la banca gana. Lo que planteamos desde Izquierda Unda es más empleo, mejores salarios y mejores pensiones.

Lo correcto hubiera sido que cualquier reforma del sistema público de pensiones forme parte de los programas políticos de las distintas fuerzas para que los ciudadanos puedan decidir con

su voto en las próximas elecciones. En todo caso IU anticipa que la mejora de las pensiones formará parte de su programa electoral y que reclamaremos el voto y la confianza de los ciudadanos para cambiar los fundamentos de esta reforma.

El futuro de las pensiones públicas y sus mejoras no vendrá por el recorte de las pensiones, sino por la mejora de los ingresos. En primer lugar y por encima de todo, de la creación de empleo. En segundo lugar, por la incorporación de la mujer al trabajo remunerado salarialmente y la equiparación de sus salarios con los de los hombres. En tercer lugar por la elevación de los salarios y la productividad. En cuarto lugar por la eliminación del fraude fiscal y la economía sumergida y el aumento de las cotizaciones máximas para reforzar el principio de solidaridad.

Para nada de esto hay medidas concretas en el anteproyecto anunciado por el Gobierno, solo escasas y vagas intenciones, mientras que para el recorte hay cantidades, plazos, medidas y controles.

Estamos ante un empobrecimiento programado a futuro de la sociedad española, un retroceso de la cohesión y de la justicia social. La reforma de las pensiones afectará de derecho a todos los trabajadores actuales a partir de los que cumplen 63 años en este año y a todos los trabajadores futuros; y de hecho, con recortes efectivos en su pensión, a más del 80 por ciento de los pensionistas futuros.

Posición política y parlamentaria de IU

En estas condiciones el CPF de IU acuerda: no apoyar ni política ni parlamentariamente la Reforma tal y como se ha concretado en el anteproyecto de ley anunciado por el Gobierno.

Debemos presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley cuando lo presente el Gobierno en el Parlamento y trabajar posteriormente con las enmiendas que sean necesarias; y en la calle mediante la movilización y la explicación a la ciudadanía para cambiar todos los fundamentos de esta reforma.

No aceptaremos ningún recorte de las pensiones. Cualquier reforma debe mejorarlas e incrementar especialmente las más bajas. Las líneas rojas siguen siendo 65 años como edad legal de jubilación, 15 años para el cómputo y 35 años de cotización para poder cobrar el 100 por 100 de la pensión. Es en este contexto y con estas condiciones donde tiene sentido un tratamiento más favorable para determinados colectivos como, por ejemplo, trabajadores en desempleo en los últimos años de su vida laboral, mujeres con periodos de baja por maternidad, becarios, jubilaciones anticipadas para determinadas profesiones más penosas,...

Una vez fijada con claridad nuestra posición, hay que decir que IU responsabiliza al Gobierno del PSOE de la orientación económica que, pactada en el Consenso de Bruselas con el PP, impide una salida social, progresista y por la izquierda a la crisis.

Además, no nos confundimos cuando argumentamos que ninguna de las medidas que se están adoptando por el Gobierno conduce a la salida de la crisis. Son excusas para desmantelar el Estado del Bienestar, acabar con las conquistas de los trabajadores y hacer retroceder a las organizaciones sindicales, sociales y políticas que defienden esos derechos. Van a por todas y nadie debería confundirse. La ofensiva contra los sindicatos de clase se va a recrudecer.

En los tanques “de pensamiento” del PSOE, como por ejemplo Analistas Financieros Internacionales (AFI), ya se plantea abiertamente a través de Emilio Ontiveros en una intervención en la Cadena SER, que la ultra actividad de los convenios colectivos es un inconveniente mayor para la competitividad de las empresas españolas, y el Grupo PRISA en un editorial del jueves 3, plantea la ultra actividad de los convenios como una cuestión abierta a la negociación; asimismo el Secretario de Estado de Hacienda ha planteado el copago sanitario, aunque haya sido desmentido por Zapatero, por cierto no con argumentos de fondo sino de mera conveniencia en cuanto a que no se saca dinero suficiente. Además el Ex Ministro de Sanidad, Bernard Soria, ha planteado públicamente y con claridad que en un plazo no superior a diez años el Sistema Nacional de Salud será inviable y, finalmente, la canciller Merkel ha planteado la exigencia de desvincular los aumentos salariales acordados en convenio del IPC, posición que rápidamente ha apoyado, por ejemplo Ramón Jáuregui. El melón sigue abierto.

IU actúa en el ámbito de lo político, de la movilización social, de la lucha en las instituciones y respeta todos los demás ámbitos que tienen su propio procedimiento de toma de decisiones, lo mismo que exige respeto al ámbito político de Izquierda Unida y a su autonomía de decisión.

Que nadie se equivoque, hoy la única posibilidad de resistencia a las propuestas de este Gobierno la representa la lucha y la movilización de los trabajadores y la ciudadanía. A ello contribuyen las propuestas alternativas de Izquierda Unida que, en su discurso, no compra ni comprará los fundamentos neoliberales de las políticas del Gobierno, porque creemos que es posible superar el neoliberalismo y derrotarle política e ideológicamente.

La coincidencia del gran capital, PP y PSOE

IU no se equivoca de adversario, que no es otro que el capital financiero que intenta reforzar su dominio político, económico, social, cultural e ideológico en nuestro país y las fuerzas políticas (especialmente PSOE, PP y los nacionalistas de derechas) que aplican las medidas neoliberales consensuadas en Europa por socialdemócratas y liberal-conservadores. Su objetivo es liberalizar los mercados, transformar en mercancías y privatizar los servicios públicos, impedir que existan instrumentos públicos estatales y europeos para liderar los cambios de modelo productivo e intervenir en la economía, alargar la edad de jubilación y recortar las pensiones públicas y condicionar los presupuestos generales de los estados miembros para garantizar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad impuesto en Maastricht. Este paquete neoliberal se aplica sin contemplaciones y a costa de desmantelar aceleradamente las conquistas sociales que permitieron conseguir el Estado Social.

El responsable de la crisis es ese modelo, que origina el mayor ataque a las condiciones de vida de las personas trabajadoras en España y Europa y ha llevado a España a los niveles de desempleo más elevados de la Unión Europea (20'3%, el doble de la media comunitaria): casi 4.700.000 parados y paradas según la última EPA, de los cuales constan ya en las oficinas de empleo demandas de 4.230.000, el registro más alto de toda nuestra historia.

La canciller Merkel, que lidera esta política en Europa, está dispuesta a seguir exigiendo a los Estados miembros que sigan al pie de la letra las recetas de recortes sociales para garantizar el enriquecimiento de unos pocos a costa del empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.

Conseguidos los objetivos de alargar la edad de jubilación y recortar las pensiones, culminar las privatizaciones, exigir el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y condicionar las ayudas para el rescate financiero al cumplimiento estricto de estos ajustes, que sólo pretenden garantizar la acumulación de capital sin políticas distributivas, quieren ahora realizar otra vuelta de tuerca contra las personas trabajadoras.

Ángela Merkel se propuso condicionar el paquete de ayuda al rescate financiero con estas políticas de ajuste antisociales y ahora plantea nuevas exigencias, como la pretensión de que se realicen reformas para limitar constitucionalmente el déficit y deuda pública y asegurarse así de que los bancos alemanes cobren los créditos que han prestado a la banca española y para ello amenaza con una Europa de dos velocidades e incluso cuestionar la composición actual de la eurozona.

Se trata de "dictar" a las soberanías nacionales lo que deben de hacer para garantizar la acumulación de capital desmontando el modelo social europeo. Basta ver las loas elogios recibidos por Zapatero procedentes de Merkel, Sarkozy y Botín, para ejemplificar las coincidencias estratégicas de todos ellos.

IU responsabiliza a estas políticas consensuadas en Bruselas del mayor ataque a las conquistas de las personas trabajadoras en España y Europa.

Las huelgas generales de Grecia, Italia, Francia, Portugal y España han pretendido parar esta ofensiva antisocial reclamando un cambio de orientación económica.

Otros aspectos del Acuerdo Social y Económico

El acuerdo firmado por los sindicatos mayoritarios en el conjunto del Estado forma parte de una lógica sindical que tiene su sentido y su metodología propia de toma de acuerdos en las asambleas de trabajadores y en las estructuras sindicales.

Una parte de ese acuerdo tiene que ver con la reforma del sistema de pensiones que hemos analizado y con relación a la cual la posición de IU es clara. Otras partes del acuerdo deberán ser valoradas también desde la lógica política y con este enfoque plantearemos nuestras posiciones a medida que el Gobierno concrete los contenidos legales o reglamentarios de cada una de las medidas.

No obstante, en función de los elementos adelantados públicamente hasta el momento, podemos afirmar que IU ve positiva la aplicación de un modelo de atención personalizada a los trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo y en el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo, a los cuales habrá que dotar de medios materiales y humanos que no pueden quedar sin concretar, puesto que existe ya experiencia en todos los países europeos de las necesidades cuantificadas propias de los modelos de este tipo. Somos partidarios de una reforma profunda de la formación profesional que debe adecuarse a las necesidades del nuevo modelo productivo y del desarrollo socioeconómico de cada territorio, pero no a las exigencias de las empresas particulares cuyos intereses no siempre coinciden con los del interés general, ni con las exigencias de un modelo productivo sostenible humana y medioambientalmente.

Las políticas activas de empleo no pueden fomentar la culpabilización de los trabajadores y trabajadoras desempleados. No existe en nuestra sociedad problemas de empleabilidad, lo que ocurre es que no hay empleos disponibles.

No estamos de acuerdo en subvencionar la contratación temporal de jóvenes, porque esa será la opción que tomen las empresas frente a otras alternativas, y los incentivos propuestos deben concentrarse especialmente en las pequeñas empresas y autónomos con trabajadores a su cargo. Creemos que las medidas excepcionales deben ampliarse a jóvenes con edad hasta 35 años, referirse siempre a la creación de nuevos puestos de trabajo y establecer controles eficaces para lograrlo, de forma que sea imposible la sustitución de trabajadores actuales por otros subvencionados. El programa de recualificación profesional debe ser mucho más ambicioso que el propuesto por el gobierno. Izquierda Unida ha planteado un programa que combine formación y empleo, financiado por el Estado, realizado en colaboración con los Ayuntamientos y con una retribución neta de 700 euros mensuales.

Proponemos un Plan Especial de recuperación del fracaso escolar que permita a los jóvenes, que han superado la edad obligatoria de escolarización, recuperar una formación básica y una titulación adecuada de forma semejante a como se hace en otros países de la UE con recursos procedentes de la propia Unión.

IU estará con CCOO y UGT para garantizar el éxito de la Iniciativa Legislativa Popular que logre rectificar la reforma laboral de acuerdo con los objetivos de la Huelga General del 29 de septiembre, lo mismo que estuvo con ellos en la organización y desarrollo de la misma.

IU considera que el llamado modelo austriaco lleva a que en la práctica sean los propios trabajadores los que se paguen su propio despido y financien su movilidad. IU esperará a que las propuestas del grupo de expertos que se quiere constituir se transformen en proposiciones legislativas, para adoptar en el Parlamento la posición que corresponda en función de los contenidos reales de la legislación que desarrolle este punto.

El CPF de IU considera que las propuestas de política de innovación, industrial y energética que incluye la creación de una Comisión para consensuar la instalación del ATC y el Plan Energético Nacional, deben formar parte de una estrategia global de transformación del actual modelo productivo que se ha mostrado como perverso para la economía española. En todo caso, no estamos de acuerdo con la prolongación de la vida de las centrales nucleares ni con ninguna decisión unilateral que fije el ATC sin el acuerdo de las poblaciones afectadas.

Los cambios del modelo productivo no pueden ser meramente técnicos, sino que deben afectar a los fundamentos del mismo, a la democracia en la empresa y a la planificación democrática de la economía, al incremento de la participación de las rentas salariales en la renta nacional, a una reforma fiscal progresiva y a una reforma financiera que conlleve la creación y potenciación de una banca pública.

El Gobierno tiene una visión tan alicorta de la reforma del sistema productivo que utiliza la ley de Economía Sostenible para colar la llamada “Ley Sinde” con cuyos elementos esenciales no estamos de acuerdo. El Gobierno pretende favorecer los intereses de las industrias de contenidos, rebajando notablemente las garantías democráticas en el uso de la red. No es tanto la preocupación por los derechos de autor y por la creación cultural lo que preside la reforma.

La privatización de las Cajas de Ahorro

En otro orden de cosas, Izquierda Unida considera que la situación de las Cajas de Ahorro, con necesidades de capitalización para hacer frente a sus obligaciones (hasta el punto de que el propio Banco de España considera como créditos problemáticos un importe superior a los 92.000 millones de euros) es resultado de una enorme indolencia durante años en el cumplimiento de las competencias que sobre el sistema financiero español tiene el Banco de España, de la que es responsable político su Gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el cual debería dimitir..

Con el objetivo de sanear el sistema de Cajas de Ahorro, evitar que sus compromisos crediticios contaminen la deuda pública del Estado y evitar o limitar al máximo que los contribuyentes tengan que hacer frente con sus impuestos a las consecuencias de la crisis del sistema de Cajas de Ahorro, IU defiende la intervención de éstas y sus transformación en una Banca Pública. Con ello se lograría también el objetivo fundamental de crear un instrumento para facilitar el crédito a la pyme y a las familias, y se impediría en el futuro que las crisis de la banca privada se conviertan en crisis sistémicas. Es decir que “los bancos privados sean demasiado grandes para dejarlos quebrar”.

El procedimiento debería consistir en: las medidas legales que decretaran la intervención, seguidas de un proceso de saneamiento basado en la enajenación de los activos y las desinversiones que fueran precisas, gestionadas por la SEPI, garantizando en todo caso los objetivos sociales de las Cajas y el empleo. La gestión del patrimonio de viviendas por una empresa pública para ponerlas en el mercado como viviendas en alquiler moderado. La financiación de esta iniciativa podría hacerse a través de la emisión de cédulas hipotecarias. Finalmente, la devolución (conservando un sistema de mutualización general de todas ellas) manteniendo el carácter público de la propiedad y los procedimientos públicos de gestión a las Comunidades Autónomas a las que están vinculadas. Nueva Ley de Cajas que garantice su gestión pública y democrática y la limitación de su operativa a actividades no especulativas, vinculadas al desarrollo regional y coherente con sus fines sociales .

La necesidad de un nuevo modelo productivo

Este cambio de modelo productivo que es necesario en nuestro país, que deberá contar con el respaldo de los interlocutores sociales, tiene que ser esencialmente una propuesta de dimensión, escenario y aplicación política, y por tanto fruto del acuerdo de las fuerzas políticas que desean un cambio profundo, democrático y socialmente avanzado.

IU esta dispuesta a ello, porque nos movemos por el interés de los trabajadores y trabajadoras y de la ciudadanía en general. Con sentido de lo que llama “de Estado”, que, parodiando la canción de los años 60, no son los banqueros ni los especuladores sino los que crean la riqueza con su trabajo.

Apoyándose en los conceptos de diálogo y de acuerdo hay una enorme presión mediática y

política para conseguir pactos sociales. Pero los trabajadores no tenemos muy buena experiencia con algunos pactos; el llamado consenso ha servido, en no pocas ocasiones, para hacer retroceder los derechos de las personas trabajadoras. ¿Para cuando el consenso para la reforma fiscal progresiva que necesita este país para financiar la salida de la crisis? ¿Para cuando el consenso para crear una banca pública que haga llegar el crédito a las empresas y familias?

En los contenidos del nuevo modelo productivo que proponemos esta nuestro sentido de estado y esos serán los planteamientos que junto con nuestras propuestas de creación de empleo, reforma fiscal, impulso de la economía real, reforma financiera con la creación de una banca pública y reforma de la ley electoral, llevaremos a la entrevista con el Presidente del Gobierno.

IU esta en la crítica y en la resistencia pero también en la alternativa. Es más, la crítica la fundamentamos con alternativas solventes y adecuadas a la situación en la que vive el país, con propuestas concretas y bien definidas. La resistencia la vamos a seguir articulando a través de la movilización, la explicación a los trabajadores y la pedagogía política.

Campaña de movilización y alternativa

Pondremos en marcha una campaña de movilización y alternativa frente a la crisis y los recortes de las pensiones, en la que nos comprometemos a poyar las iniciativas sociales amplias que surjan en esta dirección. Con esta finalidad apoyamos la convocatoria que tendrá lugar el día 19 de febrero en Madrid, suscrita por un numeroso grupo de profesionales, sindicalistas, activistas de los movimientos sociales y políticos de un amplio espectro de la izquierda.

Hacemos un llamamiento solemne a cuantos se reclaman de izquierdas a elaborar colectivamente un programa económico alternativo que permita presentar una alternativa al neoliberalismo en las elecciones generales de 2012.

De esta campaña debe formar parte la convocatoria de una amplia movilización a principios de marzo, que nos comprometemos a impulsar y organizar junto a otros componentes.

También contemplamos el apoyo a las movilizaciones estudiantiles previstas para ese mismo mes, que tienen que representar la rebelión de la juventud frente a unas reformas y recortes que harán que los jóvenes vivan peor que sus padres. Vamos a organizar cien actos de explicación de la envergadura y gravedad de las reformas del Gobierno coincidiendo con la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas y vamos a celebrar la Fiesta del 25 aniversario de IU como colofón de todo el trabajo que desarrollemos.

La situación internacional

En el terreno internacional, la “Revolución de los jazmines” en Túnez y la presión popular imparable en Egipto contra Mubarak suponen un cambio muy importante en el norte de África, una oportunidad para iniciar procesos constituyentes desde la participación activa de los pueblos para poner fin a regímenes dictatoriales, autoritarios y corruptos.

El partido de Ben Ali, Reagrupación Constitucional Democrática, formaba parte de la Internacional Socialista hasta su huida a Arabia Saudí y el partido de Mubarak, el Partido Nacional Democrático, fue miembro hasta el 1 de Febrero (hasta hace 4 días) en que fue expulsado formalmente de la IS.

IU saluda y apoya el protagonismo activo de los pueblos del norte de África para acabar con regímenes corruptos que impiden su desarrollo económico y democrático.

Esta rebeldía es el resultado fundamentalmente de las políticas neoliberales que han llevado al paro y a la marginación social a millones de jóvenes y han empobrecido al conjunto de las poblaciones. A ello se añade la falta de libertades democráticas.

IU lamenta la Política Europea de Vecindad, más preocupada por garantizar acuerdos de libre comercio con esos países que con sus derechos humanos.

La UE ha sido cómplice de estos regímenes y no ha utilizado los instrumentos de su Política de

Vecindad (Acuerdos de Asociación) para exigir el cumplimiento de su cláusula democrática. Es el caso de Túnez y Egipto pero también de Marruecos o Israel.

Programas y estrategia electoral

Para terminar el Informe quiero plantear que hoy sometemos a discusión los ejes de nuestra campaña electoral y los contenidos fundamentales del programa marco autonómico y municipal. No voy a extenderme en sus aspectos principales porque tenéis a vuestra disposición los documentos para el debate, pero si quiero subrayar unas cuantas cosas:

Primera, la validez del discurso de Izquierda Unida Federal en todos los terrenos. Hoy somos la única fuerza de carácter estatal, como se esta viendo, que defiende claramente políticas alternativas.

Segunda, que el eje de nuestros programas tiene que ser la lucha contra el neoliberalismo como expresión nítida del capitalismo moderno. Nuestra propuesta, nuestra política y nuestra gestión deben declarar Ayuntamientos y Comunidades Autónomas como escenarios políticos libres de neoliberalismo. Esto no puede significar que haya una negativa a acuerdos políticos desde planteamientos meramente ideológicos, máxime cuando cualquier acuerdo podrá tener geometría variable que va desde el apoyo a la investidura a la corresponsabilidad del gobierno.

Estamos hablando de políticas neoliberales: una determinada forma de entender las relaciones laborales en el Ayuntamiento puede no ser neoliberal, una fiscalidad municipal progresiva aun en los límites estrechos de la actual legislación puede superar los conceptos neoliberales, combatir la especulación inmobiliaria es claramente antineoliberal, sobre estas cosas y otras se pueden llegar a acuerdos políticos y programáticos.

Son las políticas neoliberales las que permiten identificar a los ciudadanos con total claridad la coincidencia entre PSOE y PP, la determinación de los mercados como comandantes de la política. Habría que proponer la transformación del BOE en Boletín Oficial del Mercado.

Tercera, esta en juego nada menos, que la pugna por la hegemonía en el terreno de la

izquierda entre el social-liberalismo que no cuestiona el sistema, y una izquierda alternativa por un nuevo modelo productivo no neoliberal y sostenible humana y medioambientalmente. Las elecciones municipales y autonómicas, y sus resultados, pueden ser plataformas para avanzar seriamente en la disputa de esa hegemonía. En este marco tenemos que felicitarnos por los distintos acuerdos que se están concretando, a nivel federal con Izquierda Republicana, la Confederación de Los Verdes-Grupo Verde y en distintas Comunidades como por ejemplo con Batzarre en Navarra, Iniciativa por el Hierro en Canarias y Los Verdes en Murcia.

Iniciativas concretas

Como cierre del Informe quiero resumir las iniciativas en las que nos comprometemos y que son las siguientes:

1.- No apoyar política ni parlamentariamente la reforma del sistema público de pensiones que presenta el Gobierno.

2.- Trabajar en el Parlamento a través de las enmiendas que sean necesarias para lograr el máximo de mejoras a favor de los intereses de los trabajadores cuando se presente ese proyecto de ley.

3.- Impulsar una campaña de movilización y alternativa frente a la crisis económica y la reforma de las pensiones. Con ese fin apoyaremos los llamamientos y plataformas que tienen por objetivo la creación de un bloque social antineoliberal y específicamente la convocatoria para el 19 de febrero y las movilizaciones estudiantiles previstas para la primera semana de marzo.

4.- Hacer un esfuerzo en esa campaña de pedagogía política por explicar que existen alternativas y que no es posible aceptar la resignación.

5.- Examinar en lo concreto las propuestas que vaya presentando el Gobierno en el Parlamento sobre políticas activas de empleo, medidas de apoyo a la contratación de jóvenes y parados de larga duración, reformas de la formación profesional, política industrial, energética y de impulso de la I+D+i, para responder de acuerdo con los criterios que fijamos en este Informe y con las

alternativas que tenemos elaboradas.

6.- Apoyar la Iniciativa Legislativa Popular para la rectificación de la Reforma Laboral que impulsan CCOO y UGT.

7.- Acudir a la entrevista con el Presidente del Gobierno con las propuestas en positivo que aquí hemos analizado y valorado y los criterios sobre las mejoras de las pensiones públicas que defendemos.

PROPUESTA DE INFORME DEL COORDINADOR FEDERAL AL CONSEJO POLÍTICO FEDERAL

5 de febrero de 2011.